

La guerrilla antifranquista y el campesinado en la posguerra española

Calificada por la dictadura de delincuencia común, silenciada por los partidos políticos después de la Transición, ignorada durante años por la historiografía y la sociedad española, la guerrilla antifranquista, popularmente conocida como «el maquis», fue sin embargo, en palabras del historiador Paul Preston, la oposición más seria al régimen de Franco. Su origen se remonta a la propia guerra civil y tuvo en jaque a las fuerzas represivas de la dictadura hasta, al menos, principios de los años cincuenta.

De carácter mayoritariamente rural, en un momento u otro estuvo presente en casi todo el territorio estatal (excepto en Castilla la Vieja, región poco propicia al ocultamiento de grupos armados y muy castigada por la represión). Según estimaciones de diferentes autores, a lo largo de su historia pasaron por sus filas entre 5.000 y 7.000 guerrilleros, aunque las personas que les ayudaron desde el «llano» (por oposición al «monte», en el que se localizaban las guerrillas) fueron varias decenas de miles. Y su existencia, así como los conflictos que se desarrollaron en torno a ella, condicionaron de forma definitiva la vida de innumerables comunidades rurales en la España de posguerra.

Origen de la resistencia armada

El origen de la guerrilla antifranquista debe buscarse en el inicio mismo de la guerra civil.

En las zonas en las que la sublevación triunfó, numerosos militantes de izquierdas, sindicalistas, personas que ocupaban cargos políticos o simples simpatizantes de la República huyeron de los núcleos de población para refugiarse en zonas abruptas y montañosas ante el temor a las represalias de los sublevados. Es el fenómeno de los *huidos* o *fugados*, cuyo propósito, en un principio, no era otro que esconderse para evitar la represión, y que sobrevivían gracias a la ayuda que familiares y amistades les proporcionaban desde los núcleos de población. Estos grupos de huidos, muy mayoritariamente masculinos, que existieron en regiones como Galicia, León, Asturias, Extremadura o Andalucía, se nutrieron posteriormente con soldados desertores del campo franquista o soldados republicanos que huían tras la caída de un frente: fue el caso, por ejemplo, de la caída del frente de Asturias en

1937, que provocó la incorporación a los núcleos de huidos asturianos y galaico-leoneses de numerosos soldados republicanos. En cambio, en Levante y Aragón, que posteriormente fue una de las zonas de guerrilla más importantes, los grupos armados no se organizaron hasta después de 1944. Y en Cataluña la resistencia armada fue principalmente protagonizada por grupos anarquistas que actuaban con una gran autonomía.

Si bien el objetivo de los grupos de huidos era principalmente sobrevivir, la represión feroz a la que los sometieron desde un principio los sublevados, como también a sus familias y apoyos, desencadenó su respuesta violenta. Los huidos llevaron a cabo acciones de represalia contra delatores de sus apoyos en los núcleos de población y también contra las nuevas autoridades y simpatizantes de los sublevados. Así se inició la espiral de violencia que iba a caracterizar al fenómeno de la guerrilla, a través principalmente de la implicación de la población *civil*, aunque en este conflicto la frontera entre población civil y no civil era tenue y permeable. Los huidos, y posteriormente los guerrilleros, siempre contaron con una red de apoyos en las poblaciones de las que eran originarios o en cuyas inmediaciones actuaban. Al mismo tiempo, en estas poblaciones siempre hubo una franja del vecindario que se implicó de una forma o de otra en la represión de huidos y guerrilleros, ya fuese a través de la delación, ya integrando directamente los grupos armados que se organizaron para luchar contra «los del monte», como el Somatén. También era frecuente que quienes daban apoyo a la guerrilla en los pueblos tuviesen finalmente que «echarse al monte» e integrar los grupos armados, ante la vulnerabilidad que les daba su situación y la posibilidad de ser objeto de represalias por parte de las fuerzas del orden. De este modo, el conflicto nació y se desarrolló como una guerra dentro de la guerra que difuminaba las fronteras entre militares y civiles. Y por otro lado, un movimiento nacido para huir de la represión franquista dio motivos a la dictadura para incrementar su carácter represivo y para prolongar el estado de guerra hasta 1948.

La alianza entre guerrilla y campesinado

Si bien las organizaciones políticas antifranquistas, especialmente el PCE, trataron de organizar la guerrilla como un movimiento de resistencia de ámbito estatal, en realidad la guerrilla

se desarrolló en un nivel local y respondió muy a menudo a conflictos locales. Las acciones de la guerrilla mezclaron de ese modo motivaciones políticas y venganzas personales que tenían que ver con conflictos enraizados en la población, agravados por la violencia de la guerra y la posguerra. La guerrilla fue también a menudo la expresión radical del descontento de un sector de la sociedad rural frente a la imposición de una dictadura tremendamente represiva, que trastocó la vida y el funcionamiento cotidiano de las comunidades rurales.

A pesar de su constante alabanza de las virtudes de la vida rural, la dictadura franquista reprimió de forma específica a los sectores populares del campesinado, tanto física como económicamente. En particular, la creación de instituciones tales como el Servicio Nacional del Trigo y, sobre todo, la Fiscalía de Tasas, cuyo objetivo era el control y la expropiación de la producción agrícola, fue vivida por una buena parte del campesinado como una intromisión inadmisible en la tradicional autonomía productiva de la comunidad campesina.

De ese modo, los guerrilleros se presentaban como aliados de los campesinos que trataban de escapar a las exacciones de la dictadura practicando el estraperlo o infringiendo de diferentes modos las nuevas normas impuestas por el franquismo para regular la economía campesina. De esta alianza entre la guerrilla y una parte del campesinado da cuenta el hecho de que muchos guerrilleros eran de origen campesino, pero sobre todo que el campesinado proporcionó la inmensa mayoría de las redes de enlaces y apoyos de la guerrilla. Es importante señalar que numerosas mujeres formaron parte de ese entramado que desde los pueblos se ocupaba de proporcionar a los grupos armados lo necesario para sobrevivir, información sobre los movimientos del Ejército o la Guardia Civil, refugio y cuidados para los enfermos y heridos. En muchos casos, estas mujeres estaban emparentadas por los guerrilleros y la ayuda a las guerrillas era vivida por ellas como una prolongación de sus labores cotidianas. Pero no hay que subestimar el componente de conciencia política, resistencia y rebeldía que suponía para aquellas mujeres campesinas colaborar con un movimiento armado que luchaba sin cuartel contra la dictadura, una colaboración que para muchas de ellas conllevó la tortura, la cárcel e incluso la muerte.

Una represión multiforme

La represión contra la guerrilla llevada a cabo por la dictadura se desarrolló, en gran medida, como una guerra contra una parte de la población civil. En efecto, tanto o más importante que el hostigamiento a los grupos de guerrilleros en el monte fue la presión a la que se sometió a los sectores campesinos susceptibles de colaborar con la guerrilla. La dictadura proclamó diferentes leyes y decretos para luchar contra el movimiento guerrillero, en particular el decreto ley del 18 de abril de 1947 contra el bandidaje y el terrorismo (calificativo dado por el régimen a la guerrilla, a la que negaba todo carácter político). Este decreto ley, que derogaba la anterior Ley de Seguridad del Estado, preveía fuertes penas, que podían llegar hasta la pena de muerte, por la participación en la guerrilla o la colaboración con grupos armados.

Pero en realidad, lo esencial de la represión contra la guerrilla se llevó a cabo en un marco extralegal. Las autoridades, en particular la Guardia Civil, principal responsable de la represión contra la guerrilla, abusaban constantemente de la población civil, a la que obligaban, por ejemplo, a alojar y alimentar gratuitamente a las fuerzas del Ejército y la Guardia Civil. Esto fue así hasta el punto de que, en algunas provincias, como Huesca, los propios alcaldes franquistas denunciaron a las autoridades los abusos de los que era objeto la población, en un contexto, además, de enorme fragilidad económica del campesinado. Pero además se prohibieron fiestas tradicionales, se impuso un toque de queda en diversas poblaciones y se establecieron restricciones en la cantidad de comida que los campesinos podían llevar consigo a las tierras de labor, para evitar que alimentaran a la guerrilla. En las provincias de Teruel y Castellón se obligó al campesinado a desalojar las masías aisladas para evitar que los guerrilleros pudiesen abastecerse en ellas. Para desenmascarar a los y las enlaces de la guerrilla, en diversas provincias se crearon «contrapartidas» o «brigadillas», es decir, grupos de guardiaciviles vestidos como guerrilleros que se desplazaban por el monte y solicitaban ayuda en las casas campesinas: por supuesto, las casas en las que se aceptaba proporcionar esta ayuda eran inmediatamente objeto de represión. Las palizas y detenciones arbitrarias estaban a la orden del



día. En los casos más extremos se recurrió a la llamada ley de fugas, que no era sino la ejecución sumaria de prisioneros alegando un intento de fuga: de este modo fueron ejecutadas de forma absolutamente ilegal y a sangre fría decenas de personas, en su mayoría campesinos y campesinas, en diversas provincias españolas durante los años de posguerra. Finalmente, una proporción importante de la población rural se vio afectada por estas medidas, cuyas características principales fueron la arbitrariedad, la brutalidad y el carácter indiscriminado.

La represión contra la guerrilla contribuyó a fragmentar y fragilizar todavía más unas comunidades campesinas que ya habían acumulado un gran sufrimiento y numerosas fracturas durante la guerra civil. Todavía no se ha evaluado en su justa medida el impacto de este conflicto en la evolución, tanto social como económica o demográfica, de numerosas zonas rurales del Estado español. Se podría relacionar el masivo éxodo rural de los años cincuenta y sesenta no solamente con el impulso industrializador y tecnocrático de la dictadura, sino también con la imposibilidad de seguir viviendo en un contexto de extrema violencia social, de expropiación constante de los recursos y de ambiente político irrespirable para gran número de campesinas y campesinos que habían creído en la posibilidad de una vida mejor durante los años de la Segunda República.

Mercedes Yusta
Historiadora, catedrática de Universidad
Universidad de París 8 (Francia)